



OHCHR REGISTRY

MISION PERMANENTE DE LA
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

GINEBRA
II.2.S 20.D.ONU.1
N°061

- 2 MARS 2010

Recipients :.....SPD.....

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales, saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oportunidad de referirse a su comunicación número GVA 1130, de fecha 20 de noviembre de 2009, relativa al Cuestionario dirigido a los Gobiernos sobre la protección social de las personas mayores - los programas de pensiones de vejez no contributivas; requerido con ocasión de la aplicación de la Resolución 8/11 del Consejo de Derechos Humanos, en ejecución al Mandato de la Experta Independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, señora Magdalena Sepúlveda.

Sobre el particular, esta Misión Permanente tiene a bien transcribir las respuestas al mencionado cuestionario, elaboradas por la Oficina de Asuntos Multilaterales y de Integración, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela:

"Cuestionario sobre la protección social de las personas mayores - los programas de pensiones de vejez no contributivas"

(i) El marco legal e institucional

1. Por favor proporcione detalles sobre el marco legal en el cual se establece el programa:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 19, la obligación del Estado de garantizar, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los Derechos Humanos. Igualmente, la Constitución establece el marco normativo del régimen de seguridad social, consagrando en su artículo 86 al disponer que "Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas".

En relación con los derechos sociales, la Constitución especifica provisiones diferenciadas por grupos sociales vulnerables, según sus características y necesidades. En lo que se refiere a los adultos mayores, dispone en su artículo 80, lo siguiente: "El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que aseguren y eleven su calidad de vida".

En concordancia con las disposiciones señaladas, el Estado adoptó en 1966 la primera legislación de Seguros Sociales; en 1993, el Reglamento General de la Ley del Seguro Social; en el 2002, Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, la cual fue objeto de reforma a través del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, publicada en Gaceta Oficial N° 5.891 de fecha 31 de julio de 2008. Esta disposición establece las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la seguridad social a sus beneficiarias y beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

Así mismo, el 12 de septiembre de 2005 a través de la Gaceta Oficial N° 38.270 se publicó el Régimen Prestacional de los Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categoría de Personas, que se regula a través de la Ley de Servicios Sociales. Esta disposición tiene como objetivo definir y regular la rectoría, organización, funcionamiento, financiamiento, determinación de las prestaciones, requisitos para su obtención y gestión de dicho régimen prestacional, creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados, pactos y convenciones sobre la materia, suscritos y ratificados por Venezuela.

La Ley de los Servicios Sociales se aplica al sistema de protección social de los adultos mayores en ausencia de capacidad contributiva, suministrándole una asignación económica en virtud de su estado de necesidad, abandono, orfandad, discapacidad, y proporcionándoles además servicio social, atención integral, integración social, etc.

Las actuaciones comprendidas en dicha Ley tienen como base los siguientes principios: Autonomía, entendida esta como el respeto a la independencia, dignidad, capacidad de decisión, bienestar y calidad de vida, desarrollo personal y comunitario de la adultos mayores; Participación: siendo el derecho y deber de las personas mayores y de los ciudadanos en general a insertarse e intervenir activamente en la formación, ejecución y control de la gestión pública del Régimen Prestacional regulado por esta Ley; Corresponsabilidad: tratándose de la concurrencia y responsabilidad compartida del Órgano Rector, del Instituto Gestor, órganos operativos, comunidad, familia y personas protegidas para la consecución de las prestaciones, programas y servicios previstos en la Ley; Progresividad: como desarrollo gradual de las prestaciones, programas y servicios del Régimen Prestacional regulado por esta Ley; Atención preferencial: garantía de trato oportuno e integral a las personas protegidas por esta Ley, por parte de las instituciones nacionales, estatales, municipales, parroquiales y comunidad organizada; Igualdad para todas las personas como sujetos de derecho y de justicia, sin discriminación alguna, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes; y, Trato digno: entendido como la atención respetuosa, no discriminatoria, ni vejatoria, a las personas protegidas por esta Ley, con el fin de promover el desarrollo de una vida segura, libre de explotación y maltrato físico o mental.

(a) Por favor indique la edad de jubilación o los requisitos de elegibilidad para la pensión y, cuando sea pertinente, el tipo de trabajo (por ejemplo empleo forma o informal) de los beneficiarios potenciales.

Jubilaciones no contributivas.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley de los Servicios Sociales, todos los venezolanos y venezolanas de sesenta (60) o más años de edad y los extranjeros y extranjeras de igual edad, así como también aquellos menores de sesenta (60) años de edad, que se encuentren en ausencia de capacidad contributiva para cotizar al Sistema de Seguridad Social, en estado de necesidad y que no estén amparados por otras leyes, instituciones y programas, destinados a brindar igual o semejantes

prestaciones a las contempladas en la presente Ley, podrán solicitar la pensión en través de asignación dineraria o de cualquier otro tipo prevista en la mencionada Ley.

Asimismo, la Ley dispone que las personas menores de sesenta años de edad, no protegidas por otras leyes que se encuentren en estado de necesidad y que no estén integradas a un grupo familiar o con discapacidad total permanente o grave temporal, que impida o dificulte severamente su actividad social, laboral o individual, las familias en situación de desprotección económica, amas de casa y pueblos indígenas en estado de necesidad, previa calificación y certificación de la condición, también recibirán dicha asignación económica.

Jubilaciones contributivas.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, establece en su artículo 27, que las mujeres deberán tener cincuenta y cinco (55) años de edad y los hombres sesenta (60) años de edad, y setecientas cincuenta (750) cotizaciones para poder hacer uso de su derecho a la pensión de vejez. Esta pensión comprende prestación en dinero y asistencia médica.

Las jubilaciones contributivas se llevan a cabo a través de el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuya razón de ser es brindar protección de la Seguridad Social a todas y todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establece como proceso de adscripción, la afiliación de empleados y empleadores a través del patrono, por lo tanto es aplicable para los trabajadores permanentes bajo la dependencia de un empleador o empleadora, sea que presten sus servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el monto de su salario; para trabajadores domésticos; miembros de las asociaciones de conductores de autos por alquiler, libres y por puesto; miembros de cooperativas, entre otros.

(b) ¿Existe alguna restricción, incluyendo un período de carencia, para poder recibir las pensiones?

Con base en las dos (2) modalidades de pensión por vejez existentes, (la prevista en la Ley de los Servicios Sociales; y la establecida en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social), ningún adulto mayor quedará desamparado del sistema de protección social, toda vez que la única limitación impuesta por la Ley de los Servicios Sociales para la disfrutar de las referidas pensiones, es que el beneficiario no podrá estar amparado o protegido por cualquier otra legislación que ofrezca igual o mayor beneficios, por ejemplo a aquellas personas protegidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; regulado por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.

(c) Indique si se trata de un programa contributivo o no contributivo

Existen dos (2) tipos de programas que conceden asignaciones o pensiones por vejez:

1. El programa contributivo que está dirigido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con la aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.
2. El programa no contributivo que está conducido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y su órgano con responsabilidad directa, el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, el cual aplica el Régimen Prestacional

de los Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categoría de Personas regulado a través de la Ley de los Servicios Sociales.

2. En caso de que el programa no esté establecido por ley, proporcione información sobre las regulaciones administrativas u otros documentos programáticos relevantes que estén disponibles y que rijan su aplicación.

No aplica, toda vez que todos los programas de protección social a los adultos mayores esta establecidos en disposiciones constitucionales y en la legislación venezolana.

3. Por favor describa el marco institucional utilizado para aplicar el programa:¹

(a) Por favor indique qué autoridades gubernamentales, estructuras y mecanismos, incluyendo aquellos a nivel federal, estatal/provincial, municipal y local, están implicados en el diseño, la aplicación y la supervisión del programa.

El Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social tiene la competencia en la protección social de los adultos mayores. Esta responsabilidad es ejercida a través de su órgano adscrito, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, cuya función es gestionar los lineamientos, políticas planes y estrategias en la materia de protección a los adultos mayores definidos por el Ministerio. Este Instituto desarrolla sus funciones a nivel nacional a través de los Centros Estadales y Municipales de Servicios Sociales.

(b) ¿Hubo organizaciones de la sociedad civil implicadas en la elaboración del marco legal, la aplicación y la supervisión del programa? En caso afirmativo, por favor describa el papel que desempeñaron.

En la República Bolivariana de Venezuela, la sostenibilidad de las políticas sociales viene determinada por el principio de corresponsabilidad que se manifiesta en la unidad dialéctica Estado-pueblo organizado. En este contexto, la Ley de Servicios Sociales establece la creación del Consejo Nacional de Servicios Sociales, el cual asesora al Ejecutivo Nacional en la formulación de lineamientos, programas, políticas, planes y estrategias en la materia. Dicho Consejo está compuesto por representantes del Gobierno Nacional, así como del poder popular, a saber: organizaciones de adultos mayores, amas de casa, personas con discapacidad, pueblos indígenas, instituciones de derechos humanos, organizaciones académicas y de las Asambleas de Comités Comunitarios de Servicios Sociales.

Para evaluar los planes y programas de servicios sociales, discutir, decidir y elevar propuestas sobre prioridades asistenciales y de servicios, la Ley establece la creación de las Asambleas de Comités Comunitarios de Servicios Sociales. Las Asambleas son espacios de reunión y articulación de los Comités, encargados de velar por el cumplimiento de las políticas, planes y programas en materia de servicios sociales a los adultos mayores y otras personas en estado de necesidad, según lo establecido en la Ley de los Servicios Sociales.

Para el control social en asuntos relativos a la gestión de los entes públicos responsables de administrar y gestionar el régimen de prestaciones de servicios sociales para el adulto mayor y otras categorías de personas, existen los Consejos Comunales, las cuales se organizan en Comités para acometer diversas actividades, dentro de las que puede haber uno específicamente para promover la protección social de las personas adultas mayores. Los Consejos Comunales son instancias de

¹ En atención al interés de la Relatora de analizar el contexto de las pensiones a las personas adultas mayores de tipo no contributiva, en lo sucesivo se explicara todo lo relativo a las pensiones por vejez no contributivas.

participación, articulación e integración entre los ciudadanos y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a dar respuesta a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades.

(ii) Los costos y la cobertura del programa

4. Por favor indique el número de beneficiarios del programa (anualmente). Si es posible, proporcione detalles de su perfil (p. Ej. sexo, edad, etnia, origen).

Durante el 2009, doscientos cinco mil (205.000) adultos mayores se beneficiaron del programa de asignaciones económicas. Esta cifra incluyó a las personas mayores de 60 años en estado de necesidad, así como también personas menores de 60 años que se encuentren en estado de necesidad, que no estén integradas a un grupo familiar o con discapacidad parcial o total, familias en situación de desprotección económica, amas de casa y pueblos indígenas en estado de necesidad.

5. ¿Qué áreas geográficas del país (nacional, regional, local) cubre el programa?

El programa se desarrolla a nivel nacional, a través de los Centros Estadales y Municipales de Servicios Sociales.

6. ¿Cuál es el presupuesto anual del programa? ¿Qué porcentaje del PIB representa?

El presupuesto anual designado para el programa de ayudas económicas cuenta con setecientos ochenta y tres millones ochenta y seis mil setecientos dieciocho bolívares con cincuenta y dos céntimos (Bs. 783.086.718,52).

7. Por favor, proporcione detalles e indique las fuentes de financiación utilizadas para el programa, así como los gastos principales de las diferentes etapas de aplicación del programa. En particular, ¿el programa utiliza recursos públicos nacionales, regionales y/o locales? ¿Se utilizan recursos externos para este programa?

La Ley establece las siguientes fuentes de financiamiento del régimen de prestaciones de los servicios sociales para el adulto mayor y otras categorías de personas:

- Asignaciones presupuestarias previstas en la Ley Presupuesto del Ejercicio Fiscal del año correspondiente.
- Aportes extraordinarios que le asigne el Ejecutivo Nacional.
- Remanentes netos de capital.
- Mecanismos impositivos para este fin, que permitan cumplir con los objetivos establecidos para dicho Régimen.
- Las cantidades recaudadas por concepto de sanciones, multas y otras de naturaleza análoga.
- Cualquier otro ingreso o fuentes de financiamiento.

A fin de contribuir con el financiamiento de las prestaciones en servicio y en especies contempladas en este Régimen, los estados y los municipios asignan recursos en su presupuesto ordinario para la atención de la población que habita en la respectiva entidad territorial.

La asignación y distribución de los recursos se realiza de acuerdo con las necesidades sociales territoriales, estudios financieros y actuariales.

8. ¿Aproximadamente cuántos beneficiarios potenciales no están cubiertos por el programa? ¿Se han iniciado estudios para averiguar las razones de esta falta

de cobertura? Si es posible, por favor proporcione detalles de su perfil (p. Ej. sexo, edad, etnia, origen...).

Se estima que dos mil doscientos treinta y nueve (2.239) adultos mayores aproximadamente, aún no se encuentran cubiertos por el programa de protección social en asignaciones económicas.

9. ¿Cuál es la cantidad media de las pensiones en relación con la media nacional de ingresos o el salario mínimo? ¿Cómo se calcula la pensión?

La Ley de Servicios Sociales establece que las personas adultas mayores que se encuentren en estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva ante el Sistema de Seguridad Social, recibirán una asignación económica entre un mínimo de sesenta por ciento, (60%) y un máximo de ochenta por ciento (80%) del salario mínimo urbano vigente.

(iii) Procedimientos de aplicación

10. ¿Qué procedimientos se utilizan para pagar a los beneficiarios?

Las asignaciones económicas se realizan a través de depósitos en las instituciones bancarias en las cuales los beneficiarios tienen una cuenta bancaria para tal fin. Ahora bien, en el caso de las comunidades indígenas se implementa la entrega de la asignación económica en efectivo teniendo en cuenta las particularidades geográficas de los pueblos originarios.

11. ¿Qué procedimientos se utilizan para informar a los beneficiarios sobre el programa? ¿Está disponible esta información en más de un idioma?

El Instituto Nacional de los Servicios Sociales dispone de un centro de llamadas, el cual suministra información a través del número 0800-abuelos, (0800-2283567), el cual opera de manera gratuita las 24 horas del día. Igualmente se han promovido campañas publicitarias en los medios de comunicación masivos. Actualmente la campaña está disponible solamente en idioma español.

12. ¿Se le ofrece a los beneficiarios otros servicios relacionados con la pensión (p. Ej. trabajo social o servicios subvencionados)? En caso afirmativo, por favor descríbalos.

Los adultos mayores también tienen la posibilidad de recibir servicios de atención social, asesoría jurídica y legal, ayudas especiales: exoneración de pasajes de transporte público y entradas a eventos públicos, asesoría nutricional, consultas médicas especializadas gratuitas, intervenciones quirúrgicas, adaptación de dispositivos médicos quirúrgicos como prótesis (dentales, auditivas, de miembros superiores e inferiores), medicinas, lentes, sillas de ruedas, andaderas, bastones, camas clínicas, colchones anti-escaras, soportes ortopédicos, además de servicios funerarios.

Igualmente, los adultos mayores reciben como programas de capacitación en manualidades, danza, teatro, música, turismo, artesanía, bisutería. Asimismo, los adultos mayores participan en programas recreativos, en planes vacacionales y de turismo social.

13. ¿Los beneficiarios del programa tienen acceso a otros servicios públicos bajo condiciones especiales en particular a los servicios de salud?

Si, todos los Adultos y Adultas Mayores tienen la posibilidad y facilidad de disfrutar de todos servicios que ofrece el Instituto Nacional de los Servicios Sociales, así como

también otros acordados a través de convenio con empresas, dando garantía de los derechos humanos y constitucionales de los adultos mayores.

De igual manera, el INASS ha celebrado jornadas de protección a nivel nacional, donde las personas adultas mayores, además de disfrutar de los beneficios ordinarios en materia de salud, se organizan eventos culturales, ferias de productos artesanales y actividades de integración con la comunidad.

(iv) Mecanismos de supervisión y procedimientos de queja

14. Por favor, describa los procedimientos que se utilizan para supervisar la aplicación del programa, y las entidades responsables de dicha supervisión.

En el programa de asignaciones económicas es importante mantener actualizada la base de datos de beneficiarios, por lo que se coordina con otras instancias con competencia en la materia, para incorporar a aquellos adultos y adultas mayores que así lo requieran.

Las entidades responsables de la supervisión de los programas están a cargo de servidores públicos formados en áreas profesionales de trabajo social y gestión social, quienes, mediante visitas a cada centro de servicio social ambulatorio o residencial, evalúan el funcionamiento de los mismos, es decir, tanto el trato que recibe el adulto mayor, como si son cubiertas sus necesidades.

La Ley de los Servicios Sociales dispone en el artículo 5, la conformación de Redes de Servicios Sociales, por parte de los organismos públicos y privados vinculados al área, que tienen la misión de garantizar la efectividad de los derechos, prestaciones, programas y servicios establecidos en la Ley. Las redes promoverán la coordinación y cooperación institucional, la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios sociales y la racionalidad en el uso de los recursos económicos asignados en beneficio de las personas protegidas por esta Ley.

Por otra parte, los Centros Estadales de Servicios Sociales y los Centros Municipales de Servicios Sociales, conjuntamente con los Comités Comunitarios de Servicios Sociales, ejercen funciones de control, seguimiento y evaluación de los procesos de gestión de los servicios sociales de atención y asistencia dirigidos a los adultos mayores.

15. ¿Existen procedimientos o mecanismos de queja vinculados al programa y disponibles para los beneficiarios? En caso afirmativo, por favor descríbalos.

Las quejas y denuncias por la comisión de hecho que vulneren o violen los derechos de los adultos mayores se encuentran establecidas en la Ley de los Servicios Sociales.

En este sentido, el artículo 103 establece la obligación de notificar al Instituto Nacional de los Seguros Sociales y/o al Ministerio Público la comisión de una falta o delito en contra de las personas adultas mayores. De igual forma, el artículo 105 de la Ley, contempla las sanciones a:

"1. La persona que se abstenga de avisar al Instituto Nacional de Servicios Sociales, el estado de necesidad del adulto o adulta mayor, o de una persona con discapacidad, con multa de seis unidades tributarias (6 U.T.) a diez unidades tributarias (10 U.T.).

2. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que amenacen con maltrato físico, a las personas amparadas por esta Ley, según la gravedad de la amenaza, con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.) a veinte unidades tributarias (20 U.T.).

3. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que no proporcionen alimentos o bien, proporcionen alimentos inadecuados, insuficientes o en mal estado a las personas amparadas por esta Ley, con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.) a veinte unidades tributarias (20 U.T.).
4. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que no proporcionen medicamentos o bien, proporcionen medicamentos inadecuados, insuficientes o en mal estado a las personas amparadas por esta Ley y cualesquiera otros cuidados materiales o psicológicos, con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.) a veinte unidades tributarias (20 U.T.).
5. El funcionario público o la funcionaria pública que prive injustificadamente a las personas protegidas por esta Ley, de las prestaciones económicas, con multa de doce unidades tributarias (12 U.T.) a veinticuatro unidades tributarias (24 U.T.).
6. El funcionario público o la funcionaria pública que injustificadamente obstaculice la inscripción en el Sistema de Información de Seguridad Social, con destitución y multa de veinte unidades tributarias (20 U.T.) a treinta unidades tributarias (30 U.T.).
7. La persona que impida injustificadamente el ejercicio del derecho a la educación, cultura, deportes y recreación, con multa de diez unidades tributarias (10 U.T.) a veinte unidades tributarias (20 U.T.).
8. Las empresas o particulares que no cuenten con asientos en las unidades de transporte público para el adulto o adulta mayor, o personas con discapacidad, con suspensión del servicio de dos días a cuatro días.
9. Las instituciones públicas o privadas que incumplan las obligaciones en materia arquitectónica y urbanística establecidas en el artículo 65 de esta Ley, con multa de veinte unidades tributarias (20 U.T.) a treinta unidades tributarias (30 U.T.). La reincidencia en la comisión de las faltas administrativas previstas en este artículo, será sancionada con multa doble".

En cuanto a las sanciones a las instituciones de atención y servicios, se puede señalar, que éstas tendrán lugar de conformidad con el artículo 106, que dispone que "Las instituciones públicas y privadas de atención y servicios para las personas protegidas por esta Ley, que incumplan con los lineamientos dictados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales, serán sancionadas con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T.) a trescientas unidades tributarias (300 U.T.) y, de ser procedente, con cierre temporal o definitivo."

Además de las faltas, la Ley también prevé las sanciones por la comisión de delitos a:

1. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que maltraten físicamente, a las personas amparadas por esta Ley, con prisión de un año a tres años. Se entiende por violencia física: la conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre la persona, tales como heridas, hematomas, contusiones, excoiaciones, dislocaciones, quemaduras, pellizcos, pérdida de dientes, empujones o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física de las personas. Igualmente, se considera violencia física a toda conducta destinada a producir daño a bienes que integran el patrimonio de la víctima.
2. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que maltraten psicológicamente, a las personas amparadas por esta Ley, con prisión de un año a tres años. Se entiende por violencia psicológica: la conducta que directa o indirectamente ocasione daño emocional, disminuya la autoestima, perjudique o perturbe el bienestar de las personas amparadas por esta Ley, tales como conductas ejercidas en deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal o dignidad, tratos humillantes y vejatorios o cualquier otro maltrato que afecte la integridad psicológica de las personas.
3. El director o directora, trabajadores de unidades geriátricas, guarderías, albergues, refugios, hogar sustituto, atención domiciliaria y otros similares, que no proporcionen

atención médica, ni rehabilitación, a pesar de ser responsable de ello, con prisión de cuatro años a ocho años.

4. La persona que induzca a error al adulto o adulta mayor, o persona con discapacidad protegida por esta Ley, para la celebración de un acto o negocio jurídico, con prisión de dos años a cuatro años. En caso de reincidencia de los delitos previstos en este artículo, la sanción será aumentada al doble. Si otra ley estableciere sanciones más severas a los delitos previstos en este artículo, se aplicará aquella con preferencia a los aquí contenidos."

Además de la sanción por el delito de privación ilegítima de la libertad de los adultos mayores, tipificada esta en el artículo 113 de la Ley de los Servicios Sociales, la cual señala "Será sancionado con las penas establecidas en el Código Penal vigente, quien haya privado ilegalmente de la libertad, confinado o incomunicado las personas protegidas por esta Ley."

16. ¿Ha habido alguna situación en la que se hayan tomado acciones legales contra el programa o contra los responsables de su aplicación? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron las circunstancias de las acciones legales y las bases de la queja?

Hasta el momento no se ha presentado ninguna situación al respecto.

(v) Estudios y evaluaciones existentes de las pensiones de jubilación

17. Por favor, proporcione cualquier estudio utilizado para desarrollar el programa, en particular las evaluaciones de las necesidades en materia de las pensiones de jubilación.

No Aplica

18. Por favor, proporcione cualquier estudio, en particular las evaluaciones de impactos, desarrollado para evaluar la aplicación del programa.

No Aplica

(vi) Otros esquemas de protección social disponibles en beneficio de las personas mayores

La Experta agradecería tener información relativa a otros esquemas de protección social que beneficien a las personas mayores, en particular los beneficios en especie como la exoneración de gastos de usuario y los servicios subvencionados. Proporcione información sobre esquemas existentes que garanticen el acceso de las personas mayores a los servicios de salud y medicamentos esenciales, a las ayudas para vivienda incluyendo el acceso al agua y al saneamiento, a la educación, al trabajo social y a los servicios asistenciales.

Para explicar el marco normativo del régimen prestaciones de servicios sociales al adulto mayor y otras categorías de personas en Venezuela, es necesario tener en cuenta que el Estado venezolano diseña e implementa políticas públicas con enfoque integral. En ese contexto, tal como se señalara con anterioridad, los adultos mayores también tienen la posibilidad de recibir de manera gratuita servicios de atención social, asesoría jurídica y legal, además de ayudas especiales, como la exoneración de pasajes de transporte público; y del pago de las entradas a eventos públicos; consultas médicas especializadas gratuitas, incluyendo intervenciones quirúrgicas, así como adaptación de dispositivos médicos quirúrgicos como prótesis (dentales, auditivas, de miembros superiores e inferiores), medicamentos, lentes, sillas de ruedas, andaderas, bastones, camas clínicas, colchones anti-escaras, soportes ortopédicos, además de servicios funerarios. De igual manera, éstos tienen acceso

gratuito a programas de capacitación en manualidades, danza, teatro, música, turismo, artesanía, y bisutería, además de participar en programas recreativos, en planes vacacionales y de turismo social.

En este contexto, es importante mencionar también las provisiones existentes para las personas en situación de discapacidad, dentro de las cuales existe una población de adultos mayores, quienes reciben protección de forma universal y gratuita.

En la República Bolivariana de Venezuela la atención a las personas con discapacidad se implementa a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social por través del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y de la Misión José Gregario Hernández, esta ultima creada el 15 de marzo de 2008 en el marco del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela.

De igual manera, se destaca la existencia de la Ley para las Personas con Discapacidad, vigente desde el 15 de noviembre 2006, cuya Misión es garantizar los derechos de forma universal y sin discriminación, y de manera integral a las personas con discapacidad. Dicha Ley está disponible en sistema de escritura Braille para personas con discapacidad visual, así como en formato oral para personas con discapacidad auditiva.

El programa social denominado "Misión José Gregario Hernández", persiguiendo el objetivo de dignificar la vida de las personas que por causas genéticas o medioambientales padecen limitaciones, toma en cuenta también las necesidades de las personas adultas mayores en situación de discapacidad, dada la obligación del Estado de asegurar los derechos de los grupos más vulnerables, en el proceso de construcción de una sociedad inclusiva, igualitaria y verdaderamente democrática.

El programa social es responsabilidad del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social y se articula en el territorio nacional en unidades estatales y municipales. Existen a nivel municipal, Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad que son las organizaciones de participación y protagonismo pleno de las personas con discapacidad para ejercer funciones específicas, atender necesidades y desarrollar las potencialidades de las personas con discapacidad, así como también viabilizar, organizar y priorizar todas las ideas, propuestas, solicitudes, necesidades y aportes para que mediante sus voceros se presenten ante los Consejos Comunales y los Consejos Locales de Planificación Pública.

De un universo de 336.270 personas con discapacidad atendidas por la Misión José Gregario Hernández a nivel nacional, 109.068 son adultos mayores, quienes se beneficiaron de ayudas técnicas, enseres, insumos, prótesis auditivas, entre otros."

Esta Misión Permanente queda a la entera disposición de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los fines de dar ultteriores informaciones que pudieran surgir sobre el particular.

La Misión Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales, hace propicia la ocasión para reiterar a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las seguridades de su más alta estima y distinguida consideración.





Ginebra, 26 de febrero de 2010

A la
Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Ginebra – Suiza